



La gran depresión

Enrique Campos Suárez✉ ecampos@eleconomista.mx

Más allá del trámite, la confianza exige justicia

La infección que pauperizó la confianza empresarial llegó desde el propio régimen con sus actos autoritarios, como anular la autonomía judicial. Así que es difícil que ahora los que invierten se traguen el paliativo de un decreto presidencial de apariencia proempresarial.

Desde las mismas formas del más reciente montaje del llamado Plan México, donde al evento para anunciar las enésimas medidas para fomentar las inversiones, suben al podio a funcionarios impresentables, mientras en la entrada retienen a los empresarios convocados.

Siempre se agradecerá cualquier anuncio de simplificación de trámites, claro. Pero lo que cuenta es que realmente se lleven a cabo tantos buenos deseos expresados en estos anuncios. Porque lo que ahora bloquea los flujos de inversión no son tantos trámites engorrosos y corruptos, sino la desconfianza.

No hay que regatear el intento del gobierno de la presidenta Sheinbaum de querer mostrar la otra cara de la moneda habitual de intransigencia de la 4T, que

fue la única que vieron con López Obrador los emprendedores, que encontraron toda clase de barreras. Sin perder el estribillo ideológico, pero el Plan México, a su estilo, entiende que sin la participación de los capitales privados no hay una salida positiva para la economía.

Facilitar el aterrizaje de proyectos mediante una reingeniería en la tramitología aligera un lastre. Sin embargo, para un inversionista que tiene visión de largo plazo, un formulario menos ayuda, pero no compensa la posibilidad de enfrentar la invención de un expediente fiscal que se tuviera que defender en un sistema judicial que perdió su independencia.

Bienvenida la agilidad administrativa, lo que se extraña en México es la pérdida de predictibilidad; los ciudadanos se tienen que adaptar; los capitales pueden elegir su destino si los costos de oportunidad marcan como insostenible la pérdida de los árbitros técnicos autónomos y la entrega de las decisiones judiciales a los intereses del régimen.

El alejamiento de las inversiones no es

una conspiración de los comentócratas de derecha, es una realidad sustentada en los datos; desde la caída en la formación bruta de capital fijo y el deterioro de los índices de confianza empresarial, hasta sus consecuencias en el propio crecimiento económico. El mercado ya no compra promesas, exige garantías.

Es indispensable que ese grupo cercano a la presidencia, que sí entiende el contexto y las necesidades económicas del país, se imponga a los retrógradas que quedaron incrustados de manera transexenal, porque son estos últimos los que han generado un entorno exterior más hostil.

Estados Unidos ha incrementado la presión, no solo en el ámbito comercial, sino también en el judicial, lo que debilita cualquier esfuerzo de promoción económica. Por lo que, los primeros recortes a lo que ya no funciona deberían ser intestinos para que el propio gobierno demuestre gobernanza real.

Reunir a los empresarios bajo el paraguas del Plan México, no puede ser solo el maquillaje para tapar un viaje a Palenque, tiene que ser evidencia de que hay voluntad interna del régimen para librar las batallas correctas con funcionarios y asesores que sí están entendiendo las consecuencias de mantenerse en el camino rupturista pavimentado el sexenio anterior.

El mercado ya dio su veredicto: la confianza se gana con instituciones, no con decretos de simplificación.

